

Renovando la arena política: estallido social, cambio constitucional y nuevo Gobierno en Chile

Renewing the Political Arena: Social Uprising, Constitutional Change and Chile's New Government

Nicolás M. Somma

Pontificia Universidad Católica de Chile y COES
nsomma@uc.cl

Sofía Donoso

Universidad de Chile y COES
sofia.donos@uchile.cl

■

Resumen:

En este artículo analizamos un proceso de renovación de los actores y las ideas en la arena política nacional que comenzó en Chile durante la última década, pero en particular desde 2019. Esta incipiente apertura fue acelerada con el estallido social de fines de 2019, que puso en marcha un proceso de cambio constitucional actualmente en curso, que movilizó institucionalmente a actores y movimientos sociales hasta ahora marginales, y contribuyó al triunfo del actual Gobierno de izquierda de Apruebo Dignidad, presidido por Gabriel Boric. Nuestro análisis muestra que las fronteras entre actores institucionales y no institucionales son más fluidas de lo que se ha reconocido y que eso ayuda a explicar la renovación de la arena política en Chile en la última década.

■

Abstract:

This article analyzes the renewal process of the actors and ideas in Chile's political arena during the last decade, focusing mainly on the last three years. The 2019 social uprising accelerated this incipient opening of the political arena by igniting a process of constitutional change currently underway. The uprising activated institutionally previously marginal actors and social movements and contributed to the victory of the current left-wing Government of Apruebo Dignidad, led by Gabriel Boric. Our analysis shows that the boundaries between institutional and non-institutional actors are more fluid than usually recognized and that this helps explain the renewal of Chile's political arena during the last decade.

■

Palabras clave:

Chile, movimientos sociales, partidos políticos, elecciones, arena política.

■

Key Words:

Chile, social movements, political parties, elections, political arena.

Renovando la arena política: estallido social, cambio constitucional y nuevo Gobierno en Chile¹

*Nicolás M. Somma
y Sofía Donoso*

Introducción

Desde la transición a la democracia en 1990, el panorama político chileno se caracterizó por su estabilidad política y económica, y su tendencia al cambio gradual. Este patrón —en claro contraste con muchos otros países de la región— ha sido interrumpido en los tres últimos años por tres eventos consecutivos encadenados causalmente: una oleada de protestas masivas a lo largo del país (conocidas como “estallido social”); un proceso de cambio constitucional todavía en curso, que fue acordado como un mecanismo institucional para hacer frente a las protestas, y más recientemente, la llegada al Gobierno de una coalición de izquierda (Apruebo Dignidad) que trajo nuevos liderazgos y al presidente más joven de la historia de la nación, el exlíder estudiantil Gabriel Boric, de sólo 36 años.

En este artículo analizamos el proceso de renovación de la arena política chilena, es decir, la renovación del conjunto de actores individuales y colectivos que inciden en las decisiones y políticas públicas en el país.²

¹ Agradecemos el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile a través del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) (ANID/FONDAP/15130009) y el proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11180890.

² Ruth Berins Collier y David Collier, *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*, Notre Dame, University of Notre Dame Press,

En su *polity model*,³ Charles Tilly argumentó que las arenas políticas están compuestas por actores centrales, con acceso a bajo costo a los resortes de poder institucional —Gobierno, partidos, Congreso (*polity members*) y actores más alejados del poder institucional que desafían desde los márgenes—, en ocasiones empleando tácticas no institucionales como protestas u otro tipo de desafíos para el sistema político.⁴ Por mucho tiempo la literatura sobre movimientos sociales señaló que los actores “desafiantes”, tales como los movimientos sociales, presionan desde los márgenes del sistema institucional, mientras que los miembros centrales de la arena política buscan conservar el *statu quo* o, a lo sumo, implementar cambios graduales. Sin embargo, las arenas políticas no son estáticas. Eventos tales como guerras, crisis económicas, elecciones con resultados inesperados o rebeliones, pueden producir coyunturas críticas en las que las arenas políticas se reordenan.⁵

Además, las arenas políticas no son estáticas porque lo que se considera como *actor institucional* y *actor no institucional* no es constante. Como se ha planteado en la literatura reciente, las fronteras entre los miembros de la arena política y los actores no institucionales como los movimientos sociales son bastante más porosas de lo que comúnmente se afirma.⁶ En el caso de Chile, dirigentes sociales que ganaron notoriedad pública a partir de las manifestaciones forman hoy parte tanto del poder ejecutivo como del legislativo. Asimismo, el denominado *estallido social* —la ola de protestas más grandes desde el retorno de la democracia en 1990— forzó un debate constitucional que parte del *establishment* político había

2002; Eduardo Silva y Federico M. Rossi (eds.), *Reshaping the Political Arena in Latin America: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2018.

³ Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, Reading, Addison-Wesley, 1978, capítulo 3.

⁴ William A. Gamson, *The Strategy of Social Protest*, Homewood, Dorsey Press, 1975.

⁵ R. B. Collier y D. Collier, *op. cit.*, capítulo 1.

⁶ Jack A. Goldstone (ed.), *States, Parties, and Social Movements*, Cambridge University Press, 2003; Doug McAdam y Sidney Tarrow, “Ballots and Barricades: On the Reciprocal Relationship between Elections and Social Movements,” en *Perspectives on Politics*, vol. 8, núm. 2, junio de 2010, pp. 529-542, en <https://doi.org/10.1017/S1537592710001234> (fecha de consulta: 7 de junio de 2022).

buscado instalar sin éxito desde hace décadas. De esta manera, enfocándonos en Chile, buscamos también contribuir a la discusión conceptual sobre la relación cambiante entre lo que comúnmente es considerado como actor institucional y no institucional en los procesos de cambio político y social. Argumentamos que esta interacción es la que permite renovar la arena política al incorporar nuevos actores, ideas y estilos de hacer política.

A continuación, revisamos la coyuntura política y social chilena de los últimos tres años a partir de las claves de análisis anteriormente planteadas. Primero describimos la arena política “estable” del periodo 1990-2013 y los primeros signos de cambio en ella entre los años de 2013 y 2017. Posteriormente, presentamos la coyuntura crítica del estallido social de 2019 y dos de sus mayores consecuencias, una directa (el inicio de un proceso de cambio constitucional) y otra indirecta (la llegada al poder de una nueva coalición de izquierda: Apruebo Dignidad). A lo largo del análisis damos cuenta de la interacción entre actores institucionales y no institucionales, y cómo esta relación ayuda a explicar el momento político actual en Chile. Concluimos que, en su conjunto, este proceso de cambio permitirá cerrar el ciclo político iniciado con la transición democrática en 1990,⁷ renovando los actores e ideas de la arena política que disputarán el nuevo ciclo en la década en curso.

Estabilidad en la arena política post-transición (1990-2013)

Después de 17 años de dictadura militar, entre 1990 y 2013, Chile experimentó un periodo de estabilidad política y económica que permitió avances sustantivos en materia de desarrollo social. Durante estos años los *polity members* provinieron de dos grandes coaliciones de centro-izquierda y centro-derecha que dominaron la vida política del país, logrando la mayoría de los escaños en el Congreso en partes casi iguales, y con un amplio predominio en la política local. Entre 1990 y 2014, la centro-izquier-

⁷ Claudio Fuentes, *La transición inacabada. El proceso político chileno 1990-2020*, Santiago, Catalonia, 2020, pp.11-21.

da llegó al Gobierno en cinco ocasiones (1990, 1994, 2000, 2006 y 2014) y la centro-derecha en solo una (2010). Sin embargo, la centro-derecha siempre tuvo un rol opositor fuerte y la paridad en el Congreso impidió que la centro-izquierda pudiera aprobar reformas que desafiaran el modelo socioeconómico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.⁸

La falta de transformaciones más profundas que enfrentaran la lógica neoliberal que había sido instalada por el régimen militar en las décadas de 1970 y 1980 produjo un malestar que, durante el siglo XXI, lentamente fue articulado por diversos movimientos sociales (indígenas, estudiantes, ecologistas y laborales entre otros).⁹ Gracias al uso de tácticas de protesta desde los márgenes de la arena política (como marchas, movilizaciones, cortes de ruta, huelgas y campañas de protesta en redes digitales), estos movimientos lograron crecientes niveles de movilización colectiva y presión sobre la clase política.¹⁰ Aunque estos movimientos lucharon por preocupaciones específicas en sus respectivos ámbitos de política pública, en general, sus demandas se orientaron a mejorar la distribución de beneficios y oportunidades materiales y simbólicos en la sociedad. Asimismo, levantaron una dura crítica al modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales (cobre, madera, salmón y agricultura) y la manera en que se instituyó la democracia liberal en Chile, tales como la falta de participación ciudadana y el carácter elitista de la política.

La incidencia de estos movimientos ocurrió de forma indirecta, gracias a la presión que ejercieron sobre la institucionalidad política. Un indicador de ello es la escasa presencia de activistas sociales en cargos de política institucional de alcance nacional como el Congreso o los ministerios (aunque sí lograron algo de penetración en la política local) durante el periodo 1990-2013. Por ejemplo, durante esos años era inusual encontrar a representantes sindicales o ambientalistas ocupando cargos de alta jerarquía

⁸ Carlos Huneeus, *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*, Santiago, Taurus, 2014; C. Fuentes, *op. cit.*, pp.155-187.

⁹ Sofía Donoso y Marisa von Bülow (eds.), *Social Movements in Chile: Organization, Trajectories, and Political Consequences*, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2017, pp.3-61.

¹⁰ *Idem*; Sebastián Valenzuela, Arturo Arriagada y Andrés Scherman, "The Social Media Basis of Youth Protest Behavior: The Case of Chile", en *Journal of Communication*, abril de 2012, vol. 62, núm. 2, pp. 299-314.

política. Como contracara, el Congreso y el poder ejecutivo estuvieron prácticamente monopolizados por políticos profesionales que gozaban de altas tasas de reelección parlamentaria.¹¹

Grietas incipientes en la arena política (2013-2019)

Algunos signos de cambio en la arena política se manifestaron en las elecciones de 2013 y 2017. Dirigentes estudiantiles que habían ganado notoriedad en las masivas movilizaciones del año 2011 por una educación gratuita y de calidad, decidieron competir en las elecciones parlamentarias de 2013 y tuvieron un éxito inesperado. Algunas de estas dirigencias pertenecían al Partido Comunista, el cual había tenido una inserción más bien precaria y marginal en la política institucional hasta ese momento, a pesar de constituir un partido histórico de Chile. Otros lo hicieron a partir de partidos políticos recientemente creados (Revolución Democrática) y otros más como parte de movimientos políticos (Izquierda Autónoma). Además, la Nueva Mayoría, coalición de centro-izquierda que amplió la Concertación de Partidos por la Democracia incorporando al Partido Comunista, ganó las elecciones presidenciales de 2013. Esto conllevó a que exdirigentes estudiantiles también entraran al poder ejecutivo. Por ejemplo, la División de Organizaciones Sociales estuvo liderada por Camilo Ballesteros, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. Revolución Democrática, si bien no formó parte del Gobierno de la Nueva Mayoría, sí decidió integrar el Ministerio de Educación para impulsar reformas educacionales desde ese espacio institucional.

Este proceso incipiente de incorporación de dirigentes sociales a espacios de toma de decisión se profundizó marcadamente con las elecciones de 2017, en las cuales debutó un nuevo sistema electoral con representación más proporcional que el anterior sistema binominal. En enero de ese año se creó la coalición Frente Amplio, la cual agrupaba fuerzas con inserción

¹¹ André Marengo dos Santos, "Comparing Houses of Representatives: Parliamentary Recruitment in Argentina, Brazil, Chile and Mexico", en *Teoría & Sociedade*, vol. 2, núm. especial, 2006, pp. 42-69.

estudiantil, territorial, ambientalista, feminista y sindical. El Frente Amplio obtuvo 20 diputados y un senador en estas elecciones. Además, su candidata presidencial, la periodista Beatriz Sánchez, sorprendió con 20% de las preferencias en la primera ronda electoral, estando muy cerca de pasar a la segunda ronda. Así, se produjo una ruptura del predominio de las dos coaliciones tradicionales y entró en la arena política una tercera fuerza política originada en los movimientos sociales.

Otras grietas se evidenciaron en el tipo de reformas políticas. El segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), apoyado por el Congreso donde gozaba de mayoría simple, aprobó reformas educativas e impositivas que aumentaban la injerencia del Estado. También propuso un proceso participativo para elaborar una nueva constitución para Chile, proyecto al que dedicó ingentes recursos y capital político. Bachelet presentó estas reformas como parte de la respuesta del sistema político a las movilizaciones estudiantiles de 2011. No obstante, el proceso constituyente no prosperó por falta de apoyo político y la desconfianza hacia los partidos políticos tradicionales.

La incipiente apertura de la arena política tuvo un retroceso en relación con la integración de nuevos actores en 2018, cuando Sebastián Piñera llegó por segunda vez al poder ejecutivo, conformando un Gobierno con una fuerte impronta tecnocrática.¹² Esto explica, en parte, que durante el segundo Gobierno de Piñera no se lograra avanzar en las agendas impulsadas por diversos movimientos sociales excepto acotados casos como la Ley de Identidad de Género (que habilita a personas transgénero a cambiar su nombre y sexo de nacimiento).

El estallido social (octubre de 2019)

El estallido social de octubre de 2019 fue el evento crítico que aceleró la incipiente renovación de la arena política chilena —una renovación actualmente en curso. Si bien en las décadas previas se habían articulado

¹² Mireya Dávila Avendaño, *Presidencialismo a la chilena. Coaliciones y cooperación política 1990-2018*, Santiago, Editorial Universitaria, 2020, pp. 223-253.

procesos de movilización importantes, el estallido social permitió darle sentido de urgencia a aquellas agendas de política pública promovidas por los movimientos sociales. Además, permitió el ingreso a la arena política de actores con una fuerte orientación al cambio que hasta entonces se habían mantenido en los márgenes de la política institucional.¹³

El estallido comenzó en octubre de 2019, cuando los estudiantes secundarios lideraron evasiones masivas en los torniquetes de varias estaciones del Metro de Santiago, capital de Chile. En la noche del 18 de octubre se produjeron varias acciones coordinadas de quema de estaciones del Metro, cuyos autores aún se desconocen. Ante la represión policial en las estaciones y las calles, en los días posteriores al 18 de octubre se generalizaron las protestas tanto pacíficas como violentas en varias ciudades del país, incitando una respuesta policial desmedida y violaciones a los derechos humanos, que fueron reportadas por organismos internacionales. Además, se paralizaron varias actividades económicas, culturales y administrativas (incluyendo conciertos, espectáculos deportivos y cumbres internacionales). Se produjo una sensación de caos generalizado en la población que dio lugar a varias asambleas de vecinos (cabildos) para buscar soluciones.

Las protestas superaron con creces, en número y masividad, cualquier antecedente previo desde que se tienen registros.¹⁴ Las demandas en las manifestaciones eran variadas. En los espacios de conversación que se organizaron a nivel local —algunos de ellos con la mediación de las municipalidades— cristalizaron demandas vinculadas a garantizar derechos en salud, educación y vivienda, mayores ingresos, derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, así como un cambio constitucional, entre otras. Las protestas no estaban coordinadas por una organización en particular. No obstante, muchas organizaciones de movimientos sociales se coordinaron a través de la Mesa Unidad Social y llamaron a una huelga general en noviembre

¹³ Kathya Araujo (ed), *Hilos tensados. Para leer el octubre chileno*, Santiago, Universidad de Santiago, 2019, pp. 9-36; Nicolás M. Somma, Matías Bargsted, Rodolfo Disi Pavlic y Rodrigo M. Medel, "No Water in the Oasis: The Chilean Spring of 2019–2020", en *Social Movement Studies*, vol. 20, núm. 4, febrero de 2021, pp. 495-502.

¹⁴ Alfredo Joignant Matías Garretón, N. M. Somma y Tomás Campos (eds.), *Informe Anual. Observatorio de Conflictos 2020*, Santiago, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), 2020, pp. 11-21.

de 2019, lo que contribuyó significativamente a darle un sentido de urgencia a la crisis política en ciernes.

Las protestas disminuyeron a medida que se acercaba el verano y en particular el mes de febrero de 2020 —mes tradicional de vacaciones en Chile. Sin embargo, algunos espacios del centro de Santiago fueron ocupados recurrentemente por los manifestantes, situación que persiste hasta la actualidad (2022). Luego de un inicio de marzo contencioso, las protestas se redujeron y mutaron en sus demandas a raíz de la llegada de la pandemia de covid-19 y las estrictas cuarentenas impuestas por el Gobierno, que limitaron las concentraciones de personas en espacios públicos y privados.¹⁵

Impacto directo del estallido: el proceso constituyente

Más allá de su compleja dinámica interna, el estallido social consolidó el proceso —iniciado en 2013— de incorporación de actores previamente marginales y desafiantes al centro de la arena política. Un impacto directo del estallido y la crisis política gatillada fue el impulso a un proceso de cambio constitucional actualmente en curso. Este proceso busca eliminar la Constitución de 1980 —forjada bajo dictadura— y reemplazarla por la primera constitución elaborada en la democracia y con participación de representantes electos por la ciudadanía. El proceso constituyente concluirá en septiembre de 2022, cuando en un plebiscito con voto obligatorio la ciudadanía ratifique o rechace la constitución propuesta.

El sentimiento de inminente colapso institucional en la elite política fue el mecanismo cognitivo¹⁶ que conectó al estallido con el cambio constitucional. La crisis política desatada por el estallido social produjo un sentimiento de amenaza y de colapso de la arena política por parte de sus actores centrales —partidos, Congreso y Ejecutivo. Después de tres semanas

¹⁵ Nicolás M. Somma y Felipe Sánchez, “Transformative Events and Collective Action in Chile During the COVID-19 Pandemic”, en Michelle Fernandez y Carlos Machado (eds.), *COVID-19’s political challenges in Latin America*, Cham, Springer, 2021, pp. 103-118.

¹⁶ D. McAdam, S. Tarrow y C. Tilly, *Dynamics of contention*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 72-88.

de protestas masivas, niveles inusitados de enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía, la paralización económica y administrativa, y el deterioro de la imagen internacional de Chile, el 15 de noviembre de 2019, la mayoría de los partidos políticos firmaron un acuerdo para iniciar un proceso de cambio constitucional. Siguiendo la hoja de ruta acordada ese día, en octubre de 2020 se celebró una elección con voto voluntario donde se consultó al electorado si quería iniciar un proceso de cambio constitucional. Con una participación de 51% del electorado, en estas elecciones 80% de los votantes optó por iniciar este proceso, y el mismo porcentaje decidió hacerlo a través de una convención constituyente donde la totalidad de sus integrantes no perteneciese al Congreso, mostrando una clara preferencia por la renovación de la arena política.

En los meses siguientes se acordó que la convención estaría integrada por 155 personas con composición paritaria de género. Esto representó la primera experiencia en el mundo con estas características y abrió la puerta al ingreso de las mujeres al momento constitucional —las cuales se encuentran subrepresentadas en la política institucional en Chile, a pesar de los avances notorios en las últimas dos décadas. Además, se acordó reservar 17 escaños de la convención a representantes de pueblos originarios, los cuales tiene escasa presencia en la política institucional.

En mayo de 2021 se realizaron las elecciones de los convencionales constituyentes. Fueron electas varias personas con militancia en partidos tradicionales y con experiencia en cargos parlamentarios o en el poder ejecutivo. Sin embargo, la mayoría de los convencionales provenía de sectores variados de la sociedad civil organizada y los círculos activistas regionales. Muchos de ellos nucleados en un principio en la Lista del Pueblo, agrupación que finalmente se desintegró. En consecuencia, la Convención Constitucional convirtió en un microcosmos donde se discutieron y ensayaron ideas innovadoras que no habían tenido un espacio de discusión en la política institucional desde la transición.

Un objetivo compartido por la gran mayoría de los movimientos sociales y sociedad civil organizada presente en la Convención fue eliminar el carácter subsidiario del Estado en la nueva constitución. Desde su creación en 1980, este principio ha pavimentado la privatización de derechos sociales en los ámbitos de salud, educación y pensiones, entre otros. Otros temas insuficientemente abordados desde 1990 y que han cobrado centralidad

en el debate constitucional son la autonomía regional, legislación indígena, perspectiva de género en diversos ámbitos, eliminación del Senado y un desarrollo económico ambientalmente sostenible, entre otros.

Es importante subrayar la centralidad del espacio constituyente al que ingresaron muchos actores previamente marginales o con escasa inserción institucional. Si bien las constituciones son tan sólo uno de los factores que determinan la política pública, proveen las grandes líneas del desarrollo social, económico, político y cultural de los países, y suelen durar décadas.¹⁷ Por tanto, si la constitución fuera ratificada en 2022, la incidencia a largo plazo de los convencionales constituyentes podría ser muy superior a la del congresista promedio.

Impacto indirecto del estallido: el Gobierno de Apruebo Dignidad

El estallido social tuvo también un impacto indirecto en la renovación de la arena política: el cambio del Gobierno nacional hacia una opción de transformación social que resonaba con las demandas planteadas durante las movilizaciones de 2019. Esto encarnó en el triunfo electoral para el periodo 2022-2026 de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, la cual incluye a los partidos y los movimientos políticos del Frente Amplio, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista. El triunfo de Apruebo Dignidad permitió la consolidación en los resortes centrales del poder institucional de una joven generación de líderes entre 30 y 40 años aproximadamente, produciendo un verdadero recambio generacional.¹⁸

Nuestra tesis es que el estallido social creó un clima propicio al triunfo del actual presidente Boric. El estallido resultó de un clima de crispación

¹⁷ Tom Ginsburg, *The Lifespan of Written Constitutions*, 2008, Berkeley, eScholarship-University of California, 2008 en <https://escholarship.org/uc/item/6jw9d0mf> (fecha de consulta: 7 de junio de 2022).

¹⁸ Matías Bargsted y Andrés González Ide, "Política: Razones para el recambio," en *Mensaje*, 18 de enero de 2022, en <https://www.mensaje.cl/edicion-impresa/mensaje-706/politica-razones-para-el-recambio/> (fecha de consulta: 7 de junio de 2022).

ciudadana hacia las elites políticas y de descontento con la distribución de recompensas materiales y simbólicas en la sociedad. Pero, además, el estallido contribuyó a darle proyección política a ese descontento. Por un lado, durante las protestas se levantó una fuerte crítica a la incapacidad del Estado chileno para cubrir los riesgos en salud, vejez, enfermedad y vivienda en una sociedad capitalista, además de la necesidad de cambiar los amarres constitucionales heredados de la dictadura y hacerse cargo de las demandas históricas de los pueblos originarios. Algunos grupos de la sociedad comenzaron a ver con ojos más críticos las desigualdades del modelo de desarrollo y a valorar propuestas de cambio en una dirección más estatista y redistributiva.¹⁹

No obstante, otra parte de la sociedad fue alertada por la escalada de violencia y saqueos, y la pérdida de control de las autoridades políticas sobre algunos espacios públicos (como la Plaza Italia en el centro de Santiago o algunas zonas de la Araucanía en el sur de Chile). Esto la predispuso a alternativas de derecha conservadora que prometían “mano dura”, como el naciente Partido Republicano de José Antonio Kast. En otras palabras, el estallido pudo haber contribuido a polarizar la opinión pública y la escena política.

Nuestra tesis es consistente con los resultados electorales de la primera y la segunda vuelta en 2021. Por primera vez desde 1990, los candidatos de las dos coaliciones tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha no lograron pasar a la segunda ronda. En la primera ronda de noviembre de 2021 estas coaliciones sufrieron una dura derrota. El candidato de centro-derecha, Sebastián Sichel, obtuvo 13% de los votos, mientras que Yasna Provoste, candidata respaldada por la Democracia Cristiana y algunos partidos de centro-izquierda, obtuvo 12% de votos. En cambio, los ganadores,

¹⁹ Carolina Aguilera, Nicolás Angelcos, Emmanuelle Barozet, Álvaro Cabrera, Vicente Espinoza, Francisca Gutiérrez Crocco, Daniela Jara, Violeta Montero y Marisol Rojas, “18/O: Personas comunes en movilizaciones extraordinarias (Parte 1)”, en CIPER, 17 de octubre de 2020, en <https://www.ciperchile.cl/2020/10/17/18-o-personas-comunes-en-movilizaciones-extraordinarias-parte-1/> (fecha de consulta: 7 de junio de 2022); Oscar Mac-Clure, Emmanuelle Barozet, José Conejeros y Claudia Jordana, “Escuchando a los chilenos en medio del estallido: Liberación emocional, reflexividad y el regreso de la palabra ‘pueblo’”, en CIPER, 2 de marzo de 2020, en <https://www.ciperchile.cl/2020/03/02/escuchando-a-los-chilenos-en-medio-del-estallido-liberacion-emocional-reflexividad-y-el-regreso-de-la-palabra-pueblo/> (fecha de consulta: 7 de junio de 2022).

José Antonio Kast, de la derecha conservadora del Partido Republicano (28%), y Gabriel Boric, de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad (26%), se situaron hacia los extremos del espectro político. En la segunda ronda, Boric se impuso holgadamente con 56% de los votos, resultando electo presidente de Chile.

Es imposible saber si Boric habría ganado sin el estallido social. Sin embargo, la crítica al modelo de desarrollo económico y político que levantó el estallido social, así como el posterior proceso constituyente, marcaron la agenda en temas para los que Boric tenía propuestas explícitas: igualdad, dignidad, redistribución, feminismo, ecología, infancia, pueblos originarios y diversidad sexual. En resumen, Boric fue el candidato con la propuesta más clara para abordar de manera institucional las demandas del estallido.

Conclusiones

La arena política en el Chile post transición a la democracia se caracterizó durante mucho tiempo por su estabilidad. Si bien esto trajo consigo grandes frutos en materia de desarrollo político, económico y social, la falta de renovación tanto de actores como de ideas produjo un profundo malestar ciudadano y desconfianza hacia los actores políticos institucionales. Es imposible comprender el estallido social del año 2019 sin este contexto. No obstante, este malestar fue, en parte, articulado por nuevos actores sociales que luego disputaron el poder en la esfera institucional, contribuyendo de manera significativa a la renovación de la arena política. De manera menos orgánica, pero igualmente relevante para el proceso político, el estallido social impulsó un proceso constitucional que, de ser exitoso, definirá el contorno de la política en el nuevo ciclo político que se ha iniciado.

En términos teóricos, Chile ilustra sobre dos mecanismos de renovación de la arena política en las democracias neoliberales del hemisferio sur:²⁰ llegada (al Congreso o al poder ejecutivo) de nuevas fuerzas a través

²⁰ R. B. Collier y D. Collier, *op. cit.*, capítulo 1; E. Silva y F. M. Rossi (eds.), *op. cit.*, pp. 3-20.

de elecciones regulares, y la irrupción extraordinaria de procesos de cambio constitucional en que los convencionales provienen de los márgenes de la política institucional. Además, este caso sugiere algunas condiciones previas que aceleran procesos de renovación de la arena política: rebeliones populares masivas que combinan tácticas pacíficas, disruptivas y violentas, y crean entre las elites políticas un clima de inminente colapso; reformas del sistema electoral que amplían la proporcionalidad; y gestación de movimientos sociales autónomos de los partidos políticos, cuyas demandas y dirigencias logran respaldo ciudadano. Finalmente, Chile ejemplifica la fluidez de las fronteras entre actores institucionales y no institucionales que se produce en coyunturas críticas, y abre un escenario futuro para estudiar el éxito o fracaso de estos nuevos actores.